**Consideraciones sobre el delito de violación de medidas sanitarias del
artículo 368 del Código Penal colombiano**

MANUEL EUCLIDES OLARTE OSPINA

Monografía para optar por el título de abogado

Asesor

Juan Carlos Álvarez Álvarez

UNIVERSIDAD EAFIT

Escuela de Derecho

Medellín

2022

Tabla de contenido

Introducción.....	3
1. El delito de violación de medidas sanitarias	6
1.1. Bien jurídico	7
1.1.1. Breve alusión al concepto	7
2. Sujetos del tipo penal de violación de medidas sanitarias	13
2.1. Sujeto Activo	13
2.2. Sujeto pasivo	13
3. Conducta típica	13
4. Otros aspectos que caracterizan el tipo penal del art. 368 del C.P.	16
5. El tipo subjetivo	17
6. Estudio de caso.....	18
6.1. Perplejidades recientes: Dos casos frente al ilícito de “Violación de medidas sanitarias”	18
BIBLIOGRAFÍA BÁSICA Y DE REFERENCIA.....	29

Introducción

En el contexto de una pandemia suscitada por SARS-CoV-2 (COVID-19) se presenta la posibilidad de ahondar en el tipo penal de “violación de medidas sanitarias” (Cfr. Artículo 368, Ley 599 de 2000), de cara a una insospechada indeterminación y escaso desarrollo legislativo y jurisprudencial, máxime el posible solapamiento de la descripción típica respecto de otros mecanismos punitivos de índole administrativo; situación que permite adentrarse en los elementos constitutivos del injusto penal y su delgada franja, dentro del marco de derecho sancionador, frente a las medidas contravencionales administrativas en la materia: ¿Cuándo estamos en los terrenos del injusto penal y cuando en los del injusto administrativo con relación a la “violación de medidas sanitarias”?

Es pues llamativo que, de portazo, aunque exista el artículo 368 de la Ley 599 de 2000 e incluso se hayan creado normas de seguridad y convivencia ciudadana o el Sistema de Vigilancia en Salud Pública, exista espacio para pensar en la presencia de un rasero de movilidad entre regímenes plenamente establecido para el tipo de “violación de medidas sanitarias”. El legislador se ha quedado corto en desarrollar tal conducta, no desde su faz típica, que es enteramente abierta, sino en su dimensión orgánica, dejando al albur del operador jurídico el invocar la tesis normativa para así definirse el área del derecho sancionador que debe arrogarse la dirección de investigación y eventual sanción.

No obstante que de conductas como la “Propagación de epidemias” (v.gr., para el ámbito carcelario con causa al hacinamiento y sobre ocupación) o el “tráfico, fabricación o porte de estupefacientes”, se tienen antecedentes de pronunciamientos diáfanos por parte de los órganos judiciales de cierre, para lo que merece el tipo penal de “violación de medidas sanitarias”, existe tan sólo una providencia definitoria que da comprensión, en veras de la misión de interpretación y aplicación de la Ley. Aquella decisión a la que se hace alusión es la fijada por la Sala Especial de Instrucción de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia en el radicado No. 00286 y, más recientemente, providencia del Tribunal Superior de Medellín, que será referida más abajo.

Con base a lo mencionado, se torna vistosa la dirección de la problemática y el hondo significado que supone la fijación de un criterio de discernimiento para transgresiones al tipo de “violación de medidas sanitarias”, en lo que contiene a la rama del derecho sancionador que se debe de ocupar de él.

A propósito de las acciones emprendidas por el gobierno nacional y entes territoriales para prevenir, contener y mitigar la infección por SARS-CoV-2 (COVID-19), navega por los mares de la auto-evidencia el hecho de aproximarse a las consecuencias de violar alguna de las tantas medidas decretadas en esta pandemia; *a fortiori*, si cotejada la normatividad, para la descripción típica de “violación de medidas sanitarias”, pueden haber consecuencias jurídicas de tesón y calibre variables, que se procesan en la lógica de áreas diferentes del derecho sancionador: ¿Salir a la calle sin el uso de mascarilla, de manera no intencional, o no acatar el pico y cédula o “pico y género”, puede acarrear un proceso penal y, como condena principal, la pena privativa de la libertad?.

No son pacíficas las soluciones dogmáticas al cuestionamiento planteado y es sobre manera valioso auscultar el criterio de los operadores jurídicos, de tener uno definido, para las domésticas y variopintas situaciones que pueden originarse en plena pandemia y con una descripción típica, tan porosa, como la del artículo 368 de la Ley 599 de 2000 que coexiste en el ordenamiento jurídico junto con regulaciones administrativas de índole sancionatorio, como medios todos de protección al bien jurídico de la “salud pública”.

Ora la vía de la persecución penal, ora las sanciones administrativas, sendas estas que ameritan un análisis, teniendo en cuenta el desarrollo jurisprudencial y normativo, que permita circunscribirlas a un material asible para la ciudadanía y operadores jurídicos, toda vez que, como en el caso avocado a la Corte Suprema de Justicia concerniente a la senadora A. L. por la presunta violación de medidas sanitarias e incursión en el tipo penal del artículo 368 del Código Penal, resalta por novedosa la decisión adoptada en providencia del 14 de mayo hogaña, a razón de que, se puede afirmar, hay una actividad judicial a esa instancia casi nula sobre el tema.

A esta altura ya es imaginable el rigor que recae sobre el t3pico en t3rminos de probabilidad de ocurrencia y seguridad jur3dica, lo que abona a la relevancia de la discusi3n en sinton3a con el provecho acad3mico y pr3ctico que reporta su definici3n entre rejas del derecho penal o del administrativo sancionatorio.

Palabras Claves

Tipo penal; violaci3n de medidas sanitarias; SARS-CoV-2; COVID-19; salud p3blica; derecho sancionador; injusto penal; injusto administrativo; c3digo penal.

1. El delito de violación de medidas sanitarias

El denuedo estatal por proteger la salud o salubridad pública, haciendo uso del derecho penal, se puede visualizar con especial énfasis en la creación de tipos penales, a veces con múltiples agravantes, encaminados, nada más y nada menos, a proteger a la sociedad de conductas que pudieran generar contagios masivos. No es gratuito que cobre presencia, bajo las condiciones de pandemia, el ejercicio analítico sobre la “violación de medidas sanitarias”.

Para bordear un ejemplo, en el artículo 265 de la Ley 95 de 1936, se establecía la privación de la libertad para quien “*occasione una epidemia mediante la difusión de gérmenes patógenos*”. De manera posterior y por medio del Decreto – Ley No. 100 de 1980, se fijó en el artículo 203 la actual redacción para el tipo de violación de medidas sanitarias.

Entonces, pese a que en Colombia se ha tenido por casi cuarenta años una composición literal típica invariable, es llamativo el casi nulo desarrollo conceptual o avances dogmáticos, tanto en la doctrina colombiana como en la jurisprudencia para su mayor comprensión. En los últimos tiempos el bien jurídico de salud pública en Colombia ha sido prolífico en discusiones político criminales acerca del consumo, porte, tráfico de estupefacientes, como obituario de batalla contra la violencia financiada por el narcotráfico¹.

Bajo ese epígrafe, el artículo 368 del Código Penal Colombiano tipifica el delito de “violación de medidas sanitarias” como a continuación reza: “El que viole medida sanitaria adoptada por la autoridad competente para impedir la introducción o propagación de una epidemia, incurrirá en prisión de cuatro (4) a ocho (8) años”.

Delito cuya pena fuere aumentada por medio de las Leyes 890 de 2004 y 1220 de 2008.

¹ En otras latitudes, por ejemplo, en la doctrina española, se encuentra referencias más amplias, no solamente desde la perspectiva del tráfico drogas, al bien jurídico, al respecto véase – y la bibliografía allí citada- CARMONA SALGADO, “Delitos contra a salud pública (I)” en Cobo del Rosal (Dir.) Compendio de Derecho Penal Español. Parte Especial”, Madrid, Marcial Pons, 2000, pp. 559 y ss.

La violación de medidas sanitarias se puede esbozar, de manera preliminar y básica, como aquella conducta en la que el sujeto activo infringe una “medida sanitaria” – adoptada por la autoridad competente – generándose o propiciándose, sea la introducción o la propagación de una epidemia.

Partiendo del texto en precedencia, subsecuente a los elementos basales del tipo, se habrá de introducir disquisición, con el objeto único dar luces y alcance a la discusión que concita la presente.

1.1. Bien jurídico

1.1.1. Breve alusión al concepto

En esta estepa inicial conviene trasegar, como primer paso al entendimiento pretendido, entre los talantes usuales a la teoría del “bien jurídico”, ello para en un segundo nivel, identificar los elementos del injusto, finalidad y consecuencias derivadas de la incursión en el delito.

Ampliamente se ha distinguido que la finalidad del derecho penal radica en la divisa de “exclusiva protección de bienes jurídicos”, esto desemboca en una serie de pilares y centros rectores de la intervención penal que se consuman en los postulados que dirigen y restringen la acción punitiva, así es como se erige el “principio de lesividad u ofensividad”, que en palabras de Ferrajoli (sentido concreto) se describe como:

Nadie puede ser castigado por un hecho que no ofenda bienes jurídicos de relevancia constitucional” y el principio de ofensividad en concreto “Nadie puede ser castigado por un hecho que, aun correspondiendo a un tipo normativo de delito, no produzca en concreto, al bien por este protegido ningún daño o peligro.²

² FERRAJOLI, Luigi. El principio de lesividad como garantía penal, en: Nuevo Foro Penal, núm. 79, Medellín, Universidad Eafit, 2012, pp.100-114.

Bajo el tamaño de la discusión de definir el concepto de “bien jurídico”, sobra recalcar que dentro del ordenamiento jurídico colombiano y para el certero reproche que significa la acción punitiva, el bien jurídico es un aspecto central de la teoría que sobre el delito impera. Un simple ejemplo de la preponderancia dada al concepto de bien jurídico parte del mismo Código Penal (con apoyadura en el artículo 2 de la Constitución Política), dentro del que se dispone, en lo que abarca la antijuridicidad material, que “para que una conducta típica sea punible se requiere que lesione o ponga efectivamente en peligro, sin justa causa, el bien jurídicamente tutelado por la ley penal” (Ley 599 de 2000).

El apartado citado admite que la ley penal está cargada de los presupuestos necesarios para extractar el bien jurídico a proteger y que la finalidad misma de la norma es la protección de tales bienes; esto permite beber de la línea seguida por Roxin quien complementa afirmando que, en ese sentido, la única restricción al legislador dimana de la Constitución. Roxin define los bienes jurídicos así: “son circunstancias dadas o finalidades que son útiles para el individuo y su libre desarrollo en el marco de un sistema social global estructurado sobre la base de esa concepción de los fines o para el funcionamiento del propio sistema”³.

Acotamiento que no es contrario a las teorías sociales del bien jurídico, pero que sí se nutre de las teorías personales, siendo un exponente de la primera Bustos, el cual afirma:

El bien jurídico surge como un principio garantizador de carácter cognoscitivo; todo individuo y la sociedad toda, debe saber qué se está protegiendo con el sistema jurídico y con cada precepto, en especial punitivo, y además tener el camino expedito para conocer las bases sobre las que se sienta esa protección y poder hacer una revisión de ellas.⁴

³ ROXIN, Claus: Derecho penal. Parte general. Tomo I. Fundamentos. La estructura de la Teoría del Delito. p. 56

⁴ BUSTOS RAMIREZ, Juan, Control social y sistema penal, Barcelona, 1987, p. 115.

Bajo la cuerda cimbrada del bien jurídico se debe proseguir con los casos de intervención del derecho penal a esas circunstancias de relevancia social. El ordenamiento jurídico proveído de esos bienes está convocado, desde la lógica expuesta, a su protección, los cuales deben ser esclarecidos o con un especial grado de concreción proveniente de la norma, hecho que permite identificar una vez verificada o su lesión o puesta en peligro la noción de delito⁵.

Aunque no es la intención explayarse sobre una averiguación pormenorizada de las diferentes corrientes inclusas al tema de bien jurídico, es admisible, sumariamente mencionar, bajo la lámpara de la teoría funcionalista, de la que uno de sus exponentes, en su versión más radical, es Günther Jakobs, que existe una noción de delito, no a partir de la lesión o puesta en peligro de bienes jurídicos, sino desde una suerte de erosión de identidad normativa en vez de una comunicación defectuosa, configurándose la pena como un medio del mantenimiento de la identidad social, no siendo la finalidad del derecho penal la evitación del daño o lesión de bienes jurídicos, más bien, la protección de expectativas sociales amparadas por normas⁶.

La posición que se asumirá en este trabajo se extenderá por los dominios de la teoría que defiende el derecho penal como medio de protección exclusiva de bienes jurídicos, que se inserta dentro los planteos sociales y personalistas. Asiente lo descrito en el reconocimiento de las garantías fundamentales y límites constitucionales, con lo que esos intereses son los que recoge el derecho penal para hacerlos materia de su protección. Por ello se considera que el bien jurídico son esa condiciones valiosas que el legislador reconoce y que facilitan y permiten el libre desarrollo del individuo dentro del sistema social.

Una vez indicado el concepto de bien jurídico del que se parte en este trabajo se indagará por el bien objeto de tutela en el delito de violación de medidas sanitarias,

⁵ FEIJOO SANCHEZ, Bernardo, El actual debate alrededor de la teoría del bien jurídico, Revista brasileira de ciências criminais, No. 100, 2013, pp. 89-139.

⁶ JAKOBS, Günther, Derecho Penal Parte General, Fundamentos y Teoría de la Imputación, Madrid, marcial Pons, 1995, pp. 45 a 47.

aclarando que el punto de partida sobre el concepto de bien jurídico que se asume tiene como único propósito que sirva para valorar la necesidad de la incriminación de la conducta consistente en “*violar medidas sanitarias*”.

El examen inicia desde la ubicación del tipo analizado. Una simple pesquisa al Código Penal arroja como bien jurídico, para el tipo previsto en el artículo 368 del C.P., la “SALUD PÚBLICA”, lo cual, requiere, verificar si esa denominación atiende realmente al objeto de protección y en caso afirmativo cuál es el contenido o alcance de esa noción.

1.1.2. La salud pública como bien jurídico

El *nomen iuris* del título en dentro del cual se encuentra el delito es la salud pública, lo que nos lleva a preguntar qué se entiende por salud pública a efectos jurídico penales y luego contrastar, si la conducta tipificada en el artículo 368 del C.P. protege este bien.

La OMS considera la salud pública como: “*el esfuerzo organizado de la sociedad, principalmente a través de sus instituciones de carácter público, para mejorar, promover, proteger y restaurar la salud de las poblaciones por medio de actuaciones de alcance colectivo*”⁷

Por su lado la Ley 1122 de 2007 en su artículo 32 la define así:

[...] el conjunto de políticas que buscan garantizar de una manera integrada, la salud de la población por medio de acciones de salubridad dirigidas tanto de manera individual como colectiva, ya que sus resultados se constituyen en indicadores de las condiciones de vida, bienestar y desarrollo del país. Dichas se

⁷ Organización Mundial de la Salud y Organización Panamericana de la Salud. “*La salud pública en las Américas. Nuevos conceptos, análisis del desempeño y bases para la acción.*” Publicación Científica y Técnica No. 589. Pág. 47. Ver: http://new.paho.org/hq/dmdocuments/2010/FESP_Salud_Publica_en_las_Americas.pdf

realizarán bajo la rectoría del Estado y deberán promover la participación responsable de todos los sectores de la comunidad.

La Corte Constitucional en sentencia C-248/19, M.P. Cristina Pardo Schlesinger, a propósito de una demanda de inconstitucionalidad incoada contra el artículo 370 del Código Penal, esgrimió como colofón de su intervención que:

[...] la salud pública es entonces un desarrollo directo del derecho a la salud que prevé el artículo 49 superior. Esto, en tanto incorpora un servicio público a cargo del Estado, encaminado a proteger la salud de los integrantes de la sociedad desde una perspectiva integral que asume los desafíos que presenta la necesidad de garantizar la salud colectiva como medio para garantizar la salud individual de las personas.

En la misma sentencia destaca la Corte Constitucional, lo siguiente:

Dentro de los esfuerzos estatales encaminados a garantizar el derecho a la salud a través de la estructuración de una política de salud pública, el derecho a la consagración de diversos tipos penales dirigidos a castigar diferentes conductas que atentan contra la salubridad pública. Entre tales tipos penales, se encuentran las conductas que pudieran generar el contagio masivo e indiscriminado de enfermedades (epidemia).

De igual manera, la Corte Constitucional, en sentencia C-225/17, M.P. Alejandro Linares Cantillo, hizo notar que:

La jurisprudencia de lo contencioso administrativo, seguida por la constitucional, en ocasiones ha utilizado indistintamente, como sinónimos, las expresiones salubridad pública y salud pública, e incluso las ha delimitado bajo el concepto de salud humana. También la jurisprudencia constitucional ha reconocido que los problemas de salubridad o salud pública no sólo afectan la salud humana, sino también otros derechos como la vida y la integridad, así como el principio de dignidad humana.

Afina la Corte Constitucional su intervención señalando:

Frente a este panorama, resulta necesario precisar el concepto de salubridad o salud pública, entendidas como expresiones sinónimas. Así, la **salubridad pública** puede ser definida como una serie de condiciones sanitarias, tanto químicas, como relativas a la organización y disposición del espacio, necesarias para la protección de la vida, salud e integridad física del ser humano, así como de las especies animales y vegetales presentes en el ecosistema. Esta definición parte de entender que los problemas de salubridad pública no sólo afectan al ser humano directamente, sino que la afectación que genera en especies animales y vegetales, en sí misma problemática, también conduce indirectamente a la afectación del ser humano por vía alimentaria o cualquier otra forma de transmisión, al reconocer la interdependencia mutua. (Negrilla extratexto).

Por su lado, la Corte Suprema de Justicia, en sentencia con radicación No. 48610, del 05 de diciembre de 2018, M.P. José Francisco Acuña Vizcaya, en cuanto a la salud pública, le entiende en los mismos términos del ya citado artículo 32 de la Ley 1122 de 2007.

En una relación de tipo contraste o inclusión, la noción de salud individual confrontada con la noción de salud pública, arroja un elemento interesante al debate, el cual no es otro que la existencia de una dimensión social que va más allá de la mera suma de saludes individuales (supraindividualidad), lo que avala la pertinencia de las aproximaciones de precedencia; debiéndose separar la salud individual de la salud pública, al ser este último de tipo colectivo, autónomo, independiente y un medio para proteger aquel.⁸

Ese valor comunitario que encarna la salud pública, no siempre se había considerado digno del *ius puniendi*, sólo hasta que la ciencia moderna logra secularizar la idea de la enfermedad y resignación ante la providencia,

⁸ Sobre este tópico CORREDOR BELTRÁN, Diego, “De los delitos contra la salud pública”, en: AAVV, *Lecciones de Derecho Penal. Parte Especial*, Bogotá, Universidad Externado de Colombia, vol. 1, p. 438, apunta: “[...] pero igualmente el carácter de “pública” que califica la salud, no debe entenderse como referencia a una peculiaridad del bien jurídico protegido, sino, más bien,, como un rasgo característico de los ataques que suponen estos delitos y que consiste en la afectación plural que representan por su carácter de delitos de peligro general o colectivo; por ello se concluye que este bien jurídico es colectivo, autónomo, independiente y debe ser separado de la salud individual, bajo el entendido que aquella puede garantizar efectivamente esta.”

alcanzándose, a través de la investigación objetiva, disminuir los impactos de enfermedades y epidemias antes consideradas desde el misticismo, por medio de controles sanitarios, higiene social y vacunación, previniendo de esa forma cualquier causa natural que pueda provocarlas.⁹

2. Sujetos del tipo penal de violación de medidas sanitarias

2.1. Sujeto Activo

Para que se configure la “violación de medidas sanitarias” no es necesario que el sujeto tenga características o calidades especiales, por el contrario, esta infracción admite que pueda ser cometida por cualquier persona. Y por ello, se puede decir que estamos ante un delito común, en contraposición a los delitos especiales en los que el sujeto requiere de una específica calidad o característica que delimita el círculo de posibles autores¹⁰.

2.2. Sujeto pasivo

Entendiendo por tal al titular del bien jurídico y en atención a que se trata de un bien penal de carácter colectivo, habremos de decir que el sujeto pasivo de la conducta es la comunidad que puede ver amenazada su salud, vida y bienestar con la realización de la conducta típica.

3. Conducta típica

El núcleo rector de la conducta es único, consistente en “*violar*” medidas sanitarias. La expresión violar, significa, en una de sus acepciones: “*Infringir o quebrantar una ley, un tratado, un precepto, una promesa*”¹¹. Al respecto Corredor Beltrán se pronuncia en igual sentido, agregando que en tal virtud se trata de un delito de mera conducta.

⁹ MUÑOZ CONDE, Francisco, Derecho penal parte especial, Valencia, Tirant lo Blanch, Edición No. 11, 1996, p. 546.

¹⁰ Al respecto véase Luzón Peña, Gómez Martín, Víctor, Los delitos especiales, Montevideo-Buenos Aires, Edisofer- B de F., 2006, p.11 y ss.

¹¹ CORREDOR BELTRÁN, Diego, “De los delitos contra la salud pública”, en: AAVV, *Lecciones de Derecho Penal. Parte Especial*, Bogotá, Universidad Externado de Colombia, vol. 1, p. 438.

La conducta está acompañada de un elemento normativo, tal componente está definido en Decreto 780 de 2016 que define las medidas sanitarias como, *“conjunto de medidas de salud pública y demás precauciones sanitarias aplicadas por la autoridad sanitaria, para prevenir, mitigar, controlar o eliminar la propagación de un evento que afecte o pueda afectar la salud de la población”*.

Como puede observarse, se trata de un concepto que padece de vaguedad y por ello, en última instancia, lo que en realidad es una medida sanitaria quedará sometido a lo que la autoridad sanitaria considere por tal. En ese orden de ideas, resulta importante se delimite quien cumple la función de autoridad sanitaria. Tal previsión se encuentra en el artículo 2.8.8.1.1.3 del Decreto 780 de 2016 (Decreto Único Reglamentario del Sector Salud y Protección Social), el cual establece que en Colombia son autoridades sanitarias: *“Entidades jurídicas de carácter público con atribuciones para ejercer funciones de rectoría, regulación, inspección, vigilancia y control de los sectores público y privado en salud y adoptar medidas de prevención y seguimiento que garanticen la protección de la salud pública”*.

También establece el artículo 1.1.1.1 del Decreto 780 de 2016:

El Ministerio de Salud y Protección Social es la cabeza del Sector Administrativo de Salud y Protección Social y tendrá como objetivos, dentro del marco de sus competencias, formular, adoptar, dirigir, coordinar, ejecutar y evaluar la política pública en materia de salud, salud pública, promoción social en salud, así como, participar en la formulación de las políticas en materia de pensiones, beneficios económicos periódicos y riesgos laborales, lo cual se desarrollará a través de la institucionalidad que comprende el sector administrativo. El Ministerio de Salud y Protección Social dirigirá, orientará, coordinará, regulará y evaluará el Sistema General de Seguridad Social en Salud y el Sistema General de Riesgos Laborales, en lo de su competencia, adicionalmente formulará, establecerá y definirá los lineamientos relacionados con los sistemas de información de la protección social.

Lo anterior se integra con la siguiente disposición contenida en el pluricitado Decreto Único, artículo 2.8.8.1.4.2:

Autoridades Sanitarias del Sistema de Vigilancia en Salud Pública. Para efectos de la aplicación del presente decreto, entiéndase por Autoridades Sanitarias del Sivigila, el Ministerio de la Protección Social; el Instituto Nacional de Salud, INS; el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, Invima, las Direcciones Territoriales de Salud, y todas aquellas entidades que de acuerdo con la ley ejerzan funciones de vigilancia y control sanitario, las cuales deben adoptar medidas sanitarias que garanticen la protección de la salud pública y el cumplimiento de lo dispuesto en esta norma, así como adelantar los procedimientos y aplicar las sanciones a que hubiere lugar.

De la organización sanitaria contenida en el Decreto 780 de 2016 se deduce la incompetencia de cualquier otro órgano para proferir medidas de índole “sanitario”.

Pese a las precisiones de arriba, se presentan crasos aprietos al momento de establecer la distinción entre “medidas de orden público” y “medidas sanitarias”. Lo anterior se ilustra a partir de la disímil interpretación que dos órganos judiciales le dan a una misma medida:

A saber, la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, providencia AEI-0091-2020, consideró que la medida de “aislamiento obligatorio preventivo” era una medida sanitaria y ello lo expresó al aproximarse al Decreto 531 de 2020 que, entre otras medidas, prorrogaba el aislamiento preventivo obligatorio que desde el mes de marzo había ordenado el Gobierno Nacional en cabeza del Presidente de la República.

Para el Tribunal Superior de Medellín, providencia No. 14-2021, en cambio, la medida de “aislamiento preventivo obligatorio” es una norma de orden público y no una medida sanitaria, y ello lo dijo refiriéndose a otro Decreto en el que se prorrogaba nuevamente esta medida. El Tribunal *dixit*: “*el Decreto 636 del 06 de mayo de 2020, de acuerdo con su propio tenor y con manifestación expresa del Ministerio de Salud, ostenta la condición de norma de orden público no de medida sanitaria*”.

Mas allá de estas dificultades, nótese que lo importante a efectos de entender el delito bajo observación, es que el elemento normativo perteneciente al tipo penal del artículo 368 del C.P., debe interpretarse conforme a dos criterios: i) la definición de medida sanitaria establecida en el Decreto 780 de 2016 y ii) la autoridad que la expide. De manera que solo tendrá el carácter de medida sanitaria para efectos de la tipicidad aquella que cumpla con estos dos criterios.

Lineal al ingrediente normativo o complemento del tipo penal, se encuentra que aquellas medidas sanitarias a cuya infracción habrase de referir el artículo 368 del C.P., son las que se adoptan para impedir la introducción o propagación de una epidemia. Para efectos penales, sin referencia al concepto elaborado por la ciencia médica, en la legislación colombiana, constatable en las actas de redacción del Código Penal de 1980 (ley 100 de 1980), “epidemia” se asemeja a una enfermedad contagiosa, esto sin que sea necesario estar en gran medida extendida, requiriéndose sí, que sea grave o peligrosa.

De suerte que, las medidas no decretadas o por la autoridad sanitaria o no adoptadas, explícitamente, para impedir la introducción o propagación de una epidemia o de riesgo no epidémico, sino por ejemplo de orden social, no se encuadran como elementos del delito de violación de medidas sanitarias y devendrán en atípica la conducta en concreto.

En síntesis, de acuerdo con lo expresado, la conducta consiste en infringir medida sanitaria que sea decretada por autoridad competente (sus elementos normativos deben ser entendidos de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 780 de 2016, que define que se entiende por medida sanitaria y cuál es la autoridad competente para dictarla) y que aquella se dirija a impedir la introducción o propagación de una epidemia.

4. Otros aspectos que caracterizan el tipo penal del art. 368 del C.P.

El tipo penal es de mera conducta, esto en la medida en que no requiere un resultado más allá de la realización de lo descrito en el tipo, es decir, no demanda un resultado material; es además un tipo de peligro abstracto, por cuanto no se impone la existencia de una lesión efectiva a la salud pública, empero si su puesta en peligro concreto¹²; sin perjuicio de las consideraciones que se harán sobre la antijuridicidad material teniendo como faro dos decisiones judiciales que se han producido en el marco de la pandemia originada por la infección por SARS-CoV-2 (COVID-19).

5. El tipo subjetivo

Se trata de un tipo doloso, que requiere que el sujeto conozca que está violando una medida sanitaria y efectivamente desee eludir el cumplimiento de la misma. Ello implica que si el sujeto desconoce la medida sanitaria no habrá dolo. Verbigracia, si el sujeto ignora que el Gobierno hizo una ampliación de la medida de aislamiento obligatorio que él sabía que regía hasta el 30 de marzo y sale a la calle el 02 de abril, sin saber que se había expedido dos días antes un decreto prorrogando la medida.

Más complejos otros casos en los que se dificulta distinguir entre error de tipo y de prohibición¹³. Así por ejemplo, en los casos en los que el sujeto sabe que existe un delito que prohíbe violar medidas sanitarias, pero en el caso concreto, cree que el aislamiento o cuarentena no es una medida sanitaria, puede discutirse si ese error es de tipo o es un error de prohibición.

En este evento podría tratarse de un error de subsunción, puesto que el sujeto le da un alcance distinto al que realmente tiene la medida sanitaria y ello lo conduce a pensar que su hecho no está prohibido o que no es delito, lo cual, plantea a su vez

¹² CORREDOR BELTRÁN, Diego, "De los delitos contra la salud pública", en: AAVV, *Lecciones de Derecho Penal. Parte Especial*, Bogotá, Universidad Externado de Colombia, vol. 1, 2019, p. 441-444.

¹³ Véase, DÍAZ y GARCÍA CONLLEDO, Miguel. *El error sobre los elementos normativos del tipo penal*, 1ª Edición, Madrid, Editorial La ley, 2008, pp. 189-215.

importantes problemas sobre la relevancia de este tipo de error y sobre su vencibilidad o invencibilidad¹⁴.

El hipotético citado es importante en este contexto, si se tiene en cuenta que ni siquiera existe unidad de criterio entre los jueces de casos como el citado en el párrafo anterior. Rememórese que según lo expuesto líneas previas, mientras que para la Corte Suprema el aislamiento preventivo obligatorio tiene el carácter de medida sanitaria, para el Tribunal Superior de Medellín es una medida de orden público.

6. Estudio de caso.

6.1. Perplejidades recientes: Dos casos frente al ilícito de “Violación de medidas sanitarias”.

A continuación, se procederá con un breve comentario frente a dos providencias proferidas por operadores jurídicos dentro del contexto de la pandemia suscitada por la COVID-19, en cuanto al tipo de violación de medidas sanitarias del art. 368 del C.P., con la plena intención de discurrir entre la antijuridicidad y una perplejidad, aunque no la única que pudiera provenir del affaire: la definición del concepto de “medida sanitaria”.

Caso 1.

Corte Suprema de Justicia.

Sala Especial de Instrucción de la Sala de Casación Penal.

Magistrado ponente: Marco Antonio Rueda Soto.

Bogotá D.C. 14 de mayo de 2020

Radicado No. 00286.

¹⁴ DÍAZ y GARCÍA CONLLEDO, Miguel, El error sobre los elementos normativos del tipo penal. 1ª Edición, Madrid, Editorial La ley, 2008, pp. 189-215.

Asunto de la providencia: viabilidad de admisión de denuncia incoada por señor Pablo Bustos Sánchez contra la senadora A.L. por la presunta transgresión de las medidas adoptadas por el Gobierno Nacional en el Decreto 531 de 2020 y las dispuestas por la Alcaldía Mayor de Bogotá mediante el Decreto 106 de 2020, emitidas en el marco de la emergencia sanitaria por el Coronavirus Covid-19.

Antecedentes:

En fecha del 08 de abril de 2020, el ejecutivo, en cabeza por el Presidente de la República, en ejercicio de las facultades otorgadas en el numeral 4 del artículo 189, artículos 303 y 305 de la Constitución Política y artículo 199 de la Ley 1801 de 2016, en el marco de la emergencia sanitaria por causa del Coronavirus COVID-19, a través del Decreto 531 de 2020 adopta, entre otras medidas, el aislamiento preventivo obligatorio, limitando totalmente la libre circulación de personas y vehículos en el territorio nacional, entre las cero horas (00:00 a.m.) del día 13 de abril de 2020, hasta las cero horas (00:00 a.m.) del día 27 de abril de 2020, con excepciones que garantizan el derecho a la vida, a la salud y la supervivencia, ordenando a los gobernadores y alcaldes permitan la circulación en casos como: adquisición bienes de primera necesidad -alimentos, bebidas, medicamentos, dispositivos médicos, aseo, limpieza, y mercancías de ordinario consumo en la población, pudiendo sólo circular una persona por núcleo familiar en ese caso. La Alcaldía Mayor de Bogotá imparte sendas órdenes a las contenidas en el decreto 531, incluyendo la continuidad del aislamiento comentado.

El señor Pablo Bustos Sánchez inicia denuncia contra la senadora A.L., señalando que registrado en una grabación de amplia divulgación en los medios de comunicación, se visualiza a la congresista A.L. incumpliendo el aislamiento obligatorio y pico y género, al encontrarse adquiriendo algunos víveres en un supermercado en compañía de su compañera sentimental C.L., con lo que presuntamente está incurriendo en la conducta tipificada en el artículo 368 del Código Penal.

Decisión:

La Corte decide INADMITIR la denuncia formulada por el actor.

Consideraciones de la Corte:

Sostiene el *iudex* que la infracción de la medida sanitaria cometida por la senadora A.L., al desatender los decretos expedidos por el ejecutivo, está despojada de toda relevancia penal.

La corporación después de otear el tipo penal contenido en el artículo 368 del Código Penal, parte del carácter fragmentario o de *ultima ratio* del derecho penal, afirmando que existen otros instrumentos jurídicos menos lesivos de los derechos de los ciudadanos, con lo que:

el derecho penal sólo debe intervenir ante los ataques más graves que sufran los bienes jurídicos más importantes, por lo cual esta rama del Derecho ha de reducir su intervención a aquello estrictamente necesario en términos de utilidad social general (...). El postulado de mínima intervención a su vez se manifiesta en el carácter subsidiario y el fragmentario del derecho penal.

Transita por el principio de lesividad y el artículo 11 de la Ley 599 de 2000, mediante los cuales se desarrolla la concepción de la antijuridicidad material, sosteniendo, así como lo hiciera la Corte Suprema de Justicia Sala Penal en el radicado SP684-2019, 53157, que:

(...) las conductas que no resultan atentatorias de la convivencia social devienen o surgen atípicas; como también, en íntima conexión con dicho postulado, que esa misma consecuencia se afirma de las acciones socialmente insignificantes toleradas por la generalidad, en lo que se ha denominado, conviene señalar, el principio de insignificancia.

Itera que los delitos de peligro abstracto, aunque:

en el momento de creación legislativa se deja implícita una presunción de peligro, esta es legal y no de derecho, por lo que el juez debe llevar a cabo un juicio de antijuridicidad a fin de determinar si se creó un riesgo efectivo, verificable empíricamente, para el bien jurídico protegido.

Riesgo carente en la conducta de la denuncia *sub lite*.

De manera adicional, tratando de abundar en consideraciones, el operador jurídico concibe que existen otros instrumentos o mecanismos para sancionar la infracción de una medida sanitaria para la situación avocada, en concreto, la sanción pecuniaria prevista en el artículo 2.8.8,1.4.2.1. del Decreto 780 de 2016, cuya interferencia en los derechos fundamentales de la ciudadana es menor.

Lo enunciado, se soporta en el análisis que efectuase para revisar el lleno de los elementos del tipo penal del artículo 368 del C.P., en especial, el elemento normativo de “medidas sanitarias”.

Con aquel propósito y retomando, la declaratoria de estado de emergencia económica, social y ecológica del Decreto 417 de 2020 (sosteniéndose en lo consignado en el artículo 215 de la Constitución Política), cuyo motivo de fondo fue intentar mitigar las consecuencias de toda índole proveniente de la Coronavirus COVID-19.

La Corte cataloga como hecho notorio la calamidad pública por la COVID, aseverando que para conjurarle el presidente estaba facultado para adoptar las medidas necesarias que, por virtud de ello, tienen entonces el alcance o calificativo de sanitarias.

En ese recuadro pincelado por la emergencia es que se expide el Decreto 531 de 2020 y por medio del cual se dispone el aislamiento preventivo obligatorio, el que según sus consideraciones introductorias explícitamente se expide en el marco de la emergencia sanitaria ocasionada a nivel global por la COVID-19.

El operador hilvana argumentos tendientes a convenir la naturaleza de la medida de aislamiento preventivo obligatorio y demostrar su ínsita connotación de “sanitaria”, pese a que su contenido, como puede elementalmente extractarse, sea de la estofa de orden público. Es así como enfatiza que la prohibición de abandonar el sitio de confinamiento elegido, se hace con miras a evitar la propagación indiscriminada de la epidemia, concluyéndose que se trata de una medida sanitaria;

más cuando, las regulaciones contenidas en el Decreto 780 de 2016, literales a y b del artículo 2.8.8.1.4.3., acuerdan que son medidas sanitarias preventivas, de seguridad y de control: “a. *Aislamiento o internación de personas y/o animales enfermos*; b. *Cuarentena de personas y/o animales sanos*”.

Como sumario de la decisión, la Corte verificó la ocurrencia de una infracción de medida sanitaria por la senadora, aunque propugna que la misma no supera el umbral de peligrosidad que exige el derecho penal para considerar su comportamiento como delito e idóneo de atentar contra el bien jurídico de la salud pública, con causa a la principalística de párrafos anteriores.

Caso 2.

Tribunal Superior de Medellín.

Sala de Decisión Penal.

Magistrado ponente: Luis Enrique Restrepo Méndez.

Medellín, 07 de mayo de 2021

Proceso No. 050016000206-2020-08118

Auto No. 14-2021.

Asunto de la providencia: Apelación de sentencia por preacuerdo, proferida por el Juzgado 30 penal del Circuito de Medellín al interior de proceso penal por Receptación, fuga de presos y violación de medidas sanitarias en contra del señor J.M.

Antecedentes:

El 3 de febrero anuario Juzgado 30 penal del Circuito de Medellín profirió sentencia condenatoria en contra del señor J.M., como autor responsable de los delitos de receptación y fuga de presos, imponiéndosele una pena de veintiocho (28) meses de prisión y multa de tres punto treinta y tres (3.33) salarios mínimos legales

mensuales vigentes; le impuso además, por el mismo lapso de la pena principal, la pena accesoria de inhabilitación en el ejercicio de derechos y funciones públicas, negándole la suspensión condicional de la ejecución de la pena y la prisión domiciliaría.

Por su lado, decidió absolverle del delito de violación a medidas sanitarias, al descartar:

El carácter típico de la conducta imputada y aceptada por Juan David Cosme por dos razones fundamentales, la primera relacionada con que el acto administrativo con el que la fiscalía pretende complementar el tipo penal transcrito, dada su condición de tipo penal en blanco, fue expedido por el Presidente de la República, que no ostenta la competencia para expedir medidas sanitarias, dado que ella recae por mandato de la ley en el Ministerio de Salud y Protección Social. Además, en concordancia con lo anterior, el Decreto 636 del 6 de mayo de 2020, de acuerdo con su propio tenor y con manifestación expresa del Ministerio de Salud, ostenta la condición de norma de orden público no de medida sanitaria. La segunda, en razón al carácter bagatelar de la conducta, que carece de idoneidad para causar lesión al bien jurídico tutelado.

Fiscalía 172 Seccional, ante esta circunstancia, interpuso el recurso de apelación arguyendo el defecto de “violación directa de la ley sustancial”, en su modalidad de interpretación errónea.

Decisión:

Confirmar el sentido del fallo de primer grado.

Consideraciones del Tribunal:

Para el tribunal no existe asomo de duda del aserto del *a quo* en cuanto a la absolución del procesado del delito de violación de medidas sanitarias. Según esa corporación, luego de analizar el tipo penal de violación de medidas sanitarias, se debe desechar la idoneidad del comportamiento para significar una afrenta concreta en contra del bien jurídico de la salud pública, máxime si la presunta norma base

del injusto imputado no se acomoda para ser complemento del tipo penal de violación de medidas sanitarias, así:

En sentir del Tribunal, la norma que fue desconocida por el acusado no fue otra que el Decreto 636 del 6 de mayo de 2020. En relación con la naturaleza de este acto administrativo, las consideraciones de la a quo se mantienen vigentes.

Se trata de un decreto que nace en el despacho del Ministerio del Interior, tal como puede advertirse de su propio texto. A través de él se imparten instrucciones en virtud de la emergencia sanitaria y se busca el mantenimiento del orden público. Así reza su encabezado. Además, se soporta en el artículo 189 numeral 4 de la Constitución, que asigna al presidente de la República conservar el orden público en todo el territorio.

Referencia la sentencia C-813 de 2014 (referida al poder de policía para regular la libertad con fines de convivencia social) entre otra jurisprudencia y disposiciones que desarrollan el tema de mantenimiento del orden público.

El tribunal se enhebra desde esa óptica a la definición que hace el Decreto 780 de 2016 sobre el concepto de medidas sanitarias, donde estas son las aplicadas por la autoridad sanitaria y que dado que el Ministerio del Interior no entra en el espectro de entidades con tal calidad (Artículo 2.8.8.1.4.2., Decreto 780 de 2016), la medida de aislamiento preventivo obligatorio materia de la infracción reprochada, no es una del tipo sanitario, por lo que es atípico el comportamiento imputado con sustento efectivo en la voz del artículo 368 del C.P.

La decisión se sintetiza en la confirmación íntegra de los argumentos del fallo de primera instancia, estableciendo que se hallaban frente a un caso de atipicidad objetiva que facultaba para proferir una decisión absolutoria en favor del procesado, a pesar de su aceptación de responsabilidad.

Antijuridicidad y perplejidad

Los casos recapitulados guardan estrecha relación en sus consideraciones sobre la antijuridicidad de las conductas causa de la *litis* y una perplejidad en cuanto al criterio para delimitar el concepto de medidas sanitarias (elemento normativo).

Para el primer ítem, antijuridicidad, caben las palabras del Tribunal Superior de Medellín en la providencia de marras, cuando advierte que no existe:

Divergencia en la base fáctica de las dos situaciones, ambas se concretan en un hecho, una persona salió de su domicilio desconociendo la prohibición que estaba vigente.

El que uno de ellos haya dejado su hogar para ir a hacer mercado y el otro lo haya hecho para vender un celular hurtado no es tema que tenga incidencia en la lesividad de ese comportamiento en particular.

Resultante de la esencial identidad factual de los supuestos yuxtapuestos, se tiene como gran remate, aplicados los principios de lesividad (*nullun crimen sine injuria*), insignificancia, fragmentariedad o *ultima ratio* y necesidad de la pena, y en atención detenida al tipo penal emanado del artículo 368 del C.P. (tipo en blanco, delito de peligro abstracto), que es necesario, más que una infracción a una medida sanitaria, que aquella se acomode milimétricamente en una conducta idónea para causar un verdadero atentado al bien jurídico protegido (riesgo efectivo).

La relevancia penal de comportamientos que intenten ajustarse al delito de violación de medidas sanitarias, dependerá de un juicio de peligrosidad, donde las meras conjeturas no bastan para franquear el umbral entre una contravención administrativa y un injusto penal.

La Corte Constitucional en la sentencia C-302 de 2010 nos evoca que:

El derecho penal solo debe intervenir ante los ataques más graves que sufran los bienes jurídicos más importantes, por lo cual esta rama del derecho ha de reducir su intervención a aquello estrictamente necesario en términos de utilidad social general (...) El postulado de mínima intervención a su vez se manifiesta en el carácter subsidiario y el fragmentario del Derecho Penal.

Señalando así mismo, la providencia referida:

[...] la conducta debe lesionar o poner en peligro efectivo el bien jurídico tutelado. De igual modo, que tratándose de los delitos de peligro abstracto, que es la condición, que tiene la figura definida en el artículo 368 de la ley 599 de 2000, la dogmática penal ha detectado dificultades en punto a establecer el riesgo derivado de la acción; problemática a la cual se han planteado soluciones diversas, una de ellas mediante la determinación de la peligrosidad bajo criterios de previsibilidad en el curso causal, no en simples sospechas.

Como un aporte a la controversia, subyacente a la cuestión de error trazada en el título de “tipo subjetivo”, se debe adicionar una nueva variable a la ecuación, dirigida a establecer dentro del juicio de peligrosidad cuando podría haber un real atentado al bien jurídico de la salud pública en el tipo de violación de medidas sanitarias.

Asimilando la notabilidad e inmediatez de la infección por SARS-CoV-2 (COVID-19), si eventualmente, vigente una medida de aislamiento preventivo obligatorio, de las implementadas por el ejecutivo, un sujeto portador del virus violase la prohibición de circulación que comporta tal medida, ¿podría hablarse qué tal conducta tiene la suficiencia para incitar un reproche penal por violación de medidas sanitarias?

La respuesta a tal interrogante, licencia para sumergirnos en una de las tantas perplejidades que envuelve el delito de violación de medidas sanitarias. Como fue antes aludido, existe indeterminación sobre el alcance del elemento normativo “medidas sanitarias”.

Si bien se tratan de normas distintas las analizadas por los operadores jurídicos de los casos comentados, la disposición específica presuntamente contrariada por los procesados, no es otras que la de: “AISLAMIENTO PREVENTIVO OBLIGATORIO”.

La interpretación de “medidas sanitarias”, para el tipo del art. 368 del C.P., de la Corte Suprema de Justicia – Sala Especial de Instrucción de la Sala de Casación Penal, a propósito del aislamiento preventivo obligatorio, privilegia la dimensión material.

Quiere decir lo anterior que, aun cuando la Corte consciente de la naturaleza de medida de orden público del aislamiento preventivo obligatorio (Decreto 531 de 2020), justifica su inclusión dentro de las consideradas “sanitarias”, por cuanto el ejecutivo, Ministerio del Interior, le ha decidido en el contexto de la pandemia por la COVID-19 y como acción efectiva para intentar paliar su transmisión, siendo coherente con el artículo 2.8.8.1.4.3 del Decreto 780 de 2016.

Por el contrario, el Tribunal Superior de Medellín, respalda en lo de su haber interpretativo, también sobre el tema de aislamiento preventivo obligatorio (Decreto 636 de 2020), un criterio que podría denominarse “orgánico” para la definición de medida sanitaria.

Sin hesitación el tribunal sostiene que el aislamiento decretado por el Presidente de la República, así como fue motivado en el instrumento normativo de adopción, es una medida para el mantenimiento del orden público, coincidente con el taxativo listado de autoridades sanitarias del artículo 2.8.8.1.4.2. del Decreto 780 de 2016.

En ese orden, el conjunto de “medidas sanitarias” y su complemento “autoridad competente” van de la mano y se imbrican hasta el punto que la indeterminación o vaguedad de una afecta sustancialmente la otra, o el criterio para fijar el alcance de una u otra pasará a asentar el límite recíprocamente.

Por lo cual, para responder la cuestión delantera, va a ser indispensable conocer el cuándo y el quien, del decreto de la medida.

La extensión que merecen las cuestiones relatadas y breve caracterización del tipo de medidas sanitarias se trasluce en la serendipia de las determinaciones hechas por la Corte Suprema de Justicia y Tribunal Superior de Medellín, y las prolíficas discusiones resultantes de vislumbrar los elementos del tipo bajo la lupa de la doctrina y dogmática vigente; pudiendo reconocer una serie de vacíos y defectos de vaguedad en la redacción penal y administrativa que dejan espacio para

profundizar, aunque con la afectación clásica que suponen los tipos en blanco contra la seguridad jurídica¹⁵.

En el entendido que la conducta de transgresión se halla inconclusa o vagamente indicada, por la remisión hecha desde el tenor del artículo 368, un sector de la doctrina le considera violatorio de las garantías más preponderantes de un proceso penal, una de ellas la legalidad.

Corredor Beltrán, pone de presente que las medidas sanitarias en el ordenamiento jurídico colombiano se hallan dispersas en diferentes cuerpos normativos y en cabeza de muchas autoridades sanitarias. Un ejemplo bastante dicente es la Ley 623 de 2000, al regular la erradicación de la peste porcina clásica, en su artículo 1º señala que los encargados de proferir las medidas sanitarias correspondientes serán el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y, en especial, el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA); lo que demuestra claramente que, dependiendo de la epidemia de que se trate, la entidad encargada de prevenirla será quien por distribución de competencias del Estado esté facultada para ello¹⁶.

¹⁵ Véase SANDOVAL FERNÁNDEZ, Jaime, “Los tipos penales en blanco, límites materiales en una visión garantista”, en *Derecho Penal y Criminología*, vol. XXI, núm. 65, Bogotá, Universidad Externado de Colombia, 1999.

¹⁶ CORREDOR BELTRÁN, Diego, “De los delitos contra la salud pública”, en: AAVV, *Lecciones de Derecho Penal. Parte Especial*, Bogotá, Universidad Externado de Colombia, vol. 1, p. 442.

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA Y DE REFERENCIA

Carmona Salgado, “Delitos contra la salud pública (I)” en Cobo del Rosal (Dir.) Compendio de Derecho Penal Español. Parte Especial”, Madrid, Marcial Pons, 2000.

Corredor Beltrán, Diego, “De los delitos contra la salud pública”, en: AAVV, *Lecciones de Derecho Penal. Parte Especial*, Bogotá, Universidad Externado de Colombia, vol. 1, 2019.

Díaz y García Conlledo. El error sobre los elementos normativos del tipo penal. Madrid. La ley. 2008.

Díez Ripollés, José Luis. “De la sociedad del riesgo a la ciudadana: un debate desenfocado”, en *Nuevo Foro Penal*, No. 69, Medellín, Universidad EAFIT, 2006

Fuentes Osorio, Juan L. “Formas de Anticipación de la tutela penal”, en *Revista Electrónica de Ciencia Penal y Criminología*, No. 8 (2006). [Disponible en Internet]: <http://criminet.ugr.es/recpc/08/recpc08.html>

Jakobs, Günther, Derecho Penal Parte General, Fundamentos y Teoría de la Imputación, Madrid, marcial Pons, 1995, pp. 45 a 47.

Luzón Peña, Diego-Manuel. *Lecciones de Derecho Penal. Parte General*, Valencia, Tirant Lo Blanch, 2016.

Mendoza Buergo, Blanca. *El Derecho penal en la sociedad del riesgo*, Madrid, Civitas Ediciones, 2001.

Mendoza Buergo, Blanca. *Límites dogmáticos y político-criminales de los delitos de peligro abstracto*, Comares, Granada, 2001.

Muñoz Conde, Francisco. Derecho penal parte especial, Valencia, Tirant lo Blanch, Edición No. 11, 1996,

Organización Mundial de la Salud y Organización Panamericana de la Salud. “*La salud pública en las Américas. Nuevos conceptos, análisis del desempeño y bases*”

para la acción". Publicación Científica y Técnica No. 589. Pág. 47. Ver: http://new.paho.org/hq/dmdocuments/2010/FESP_Salud_Publica_en_las_Americas.pdf

Sotomayor, Juan O. (2020). "*El delito de violación de medida sanitaria (ART. 368 C.P) en tiempos de covid-19*". Nota jurídica. Disponible en la dirección electrónica: <https://www.arcilaysotomayor.com/notas-jurídicas>

Reyes Echandía, Alfonso. *Derecho Penal, Parte General*, Bogotá, Universidad Externado de Colombia, 1977.

Roxin, Claus. *Derecho Penal. Parte General. Fundamentos. La estructura de la teoría del delito*. Tomo I., (Traducción: Luzón Peña, García Conlledo y Remesal), Madrid, Civitas, 1997.

Sandoval Fernández, Jaime. "Los tipos penales en blanco, límites materiales en una visión garantista", en *Derecho Penal y Criminología*, vol. XXI, núm. 65, Bogotá, Universidad Externado de Colombia, 1999.

Silva Sánchez, Jesús María. *La expansión del Derecho penal. Aspectos de la política criminal en las sociedades postindustriales* Montevideo, Editorial B de F, 2006.

Velásquez Velásquez, Fernando. *Derecho Penal. Parte General*, Bogotá, Comlibros, 2009.

Zaffaroni. Eugenio Raúl. *Manual de Derecho Penal. Parte General*, Buenos Aires, Editorial Ediar, 2006.